



Calificadoras a juicio

Las agencias calificadoras de deuda —como Standard & Poors, Fitch y Moody's, que copan el noventa por ciento del mercado— han sido las encargadas, antes y después de la crisis de 2007, de dinamitar el Estado de bienestar a través de deuda privada hecha pública. Por eso hoy enfrentan querellas en su contra en varios países.



Roberto Bisso*

En manos de los deudores

La presunción de inocencia de todo acusado fue el escudo detrás del cual se alinearon casi todos los ministros europeos de finanzas para no comentar sobre Dominique Strauss-Kahn (conocido como DSK), el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), encerrado en una cárcel en Nueva York a la espera de que se inicie este viernes el juicio en su contra por intento de violación y agresión sexual.

El primer ministro de Luxemburgo y presidente del grupo de países que tiene al euro como moneda, Jean-Claude Juncker, se salió de este libreto para confesarse “triste y enojado” por las imágenes que vio en televisión de su “amigo” esposado y sin afeitar en la primera pre-

sentación ante la jueza Melissa Jackson, quien le negó la libertad bajo fianza a quien hasta unas horas antes era el seguro futuro presidente de Francia.

Las simpatías de la ministra española de Economía, Elena Salgado, estuvieron en cambio con la víctima: “En primer lugar, mi solidaridad está con la mujer si ha sufrido una agresión”, dijo. Y su colega de Austria, Maria Fekter fue más allá. “Yo no comento asuntos judiciales, pero dada la situación de fianza denegada, él debería considerar si no le hace daño a la institución”.

DSK iba a presentar su renuncia en las próximas semanas para postularse a las elecciones primarias de los socialistas franceses, en momentos en que las encuestas publicadas el mismo día de su prisión lo señalaban como el único candidato capaz de evitar la reelección de Nicolás Sarkozy. Ahora esta renuncia le está siendo pedida para evitarle al FMI la incomodidad de destituir a quien por el momento es técnicamente inocente o permanecer por varios meses, mientras dura el juicio, bajo el liderazgo interino de John Lipsky, un estadounidense vinculado a la banca Morgan, quien además ya había presentado su renuncia a partir de agosto.

Desde la creación simultánea en la conferencia de Bretton Woods en 1944 del Banco Mundial y el FMI, un acuerdo de caballeros no escrito en ningún

lado estableció que el presidente del primero sería siempre de Estados Unidos, mientras que el segundo siempre ha sido dirigido por un europeo. Otro acuerdo, tampoco escrito, suponía que los países emergentes podrían aspirar a este cargo después de DSK, como reconocimiento de su creciente peso en la economía mundial, que no se refleja en su poder de voto en el organismo.

Si bien Europa ha ido reduciendo sus cuotas en el FMI, éstas no bajarán del veintinueve por ciento del total de votos, muy por encima del veinte por ciento de participación europea en el ingreso global. China, en cambio, tiene apenas seis por ciento de los votos, aunque representa catorce por ciento de la economía mundial.

Cuando el español Rodrigo Rato renunció sorpresivamente a la dirección en 2007, la candidatura de DSK fue decidida en apenas doce días. En ese momento la economía mundial estaba en auge y el FMI en crisis... por falta de clientes. La decisión de Brasil de

pagar por adelantado sus deudas con el organismo, seguida pronto por otros países deseosos de independizarse de sus condicionalidades habían dejado a Turquía como único deudor de cierto monto y el FMI, que vive de los intereses que cobra, como cualquier banco, tuvo que despedir personal y recortar la provisión de café gratis en sus oficinas de Washington.

Al estallar en 2008 la crisis financiera y económica global, que el FMI no supo prever ni menos evitar, el recién creado Grupo de los 20 (G-20) países más grandes del mundo resolvió confiar al organismo más responsabilidades sobre las finanzas globales y triplicar su capacidad financiera, un gesto al que China, Brasil, India y los demás miembros del Sur del G-20 accedieron [y financiaron!] a cambio de la promesa de “mayor voz y representación” de las economías emergentes.

El ex ministro sudafricano Trevor Manuel, su par Tharman Shanmugaratnam, de Singapur, Agustín Carsens, de México, el también mexicano Angel Gurría, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el indio Montek Ahluwalia, vicepresidente de la comisión de planificación de su país, y el turco Kamal Dervis están entre los nombres que se manejaban como posibles sucesores, en cumplimiento de esta promesa.

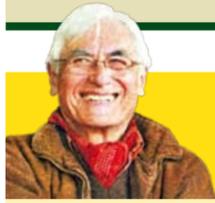
Sin embargo, el lunes 16, saliendo de una reunión sobre las finanzas europeas a la que DSK iba a concurrir cuando fue invitado a bajar del avión por la policía de Nueva York, la cancillera alemana Angela Merkel dijo que, dada la crisis de la deuda de los países de la eurozona, habrían “buenas razones” para proponer un candidato europeo. Un portavoz de José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, pronto agregó que la Unión Europea propondría una candidatura si DSK deja el cargo y el ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, agregó que “sería preferible si conserváramos este cargo en el futuro”.

Ya habría acuerdo en Bruselas en torno a Mario Draghi, gobernador del Banco Central de Italia, dejando atrás a la única mujer candidata, la ministra Christine Lagarde, con el argumento de que el FMI ya ha tenido cuatro directores franceses, y al ex premier británico Gordon Brown, por el mismo motivo por el cual no fue invitado a la boda del siglo: es un plebeyo escocés a quien su sucesor conservador, David Cameron, odia.

Curiosamente, ha sido dejado de lado el argumento por el cual jamás se admitía hasta ahora a un director del Sur: dejar al FMI en manos de los deudores sería como confiarle el gallinero a un zorro.

* Director del Instituto del Tercer Mundo (IteM).

Dejar al FMI en manos de los deudores sería como confiarle el gallinero a un zorro.



Maligno verde

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Al entrañable César Lévano y a Arturo Belaunde con plena solidaridad

Los desconocidos que enviaron flores fúnebres a César Lévano y Arturo Belaunde querían mostrarnos que el espíritu maligno verde sigue en las andadas. El Plan Verde fue redactado en secreto en 1987 preparando un golpe contra Alan García. Pero se filtró. Una parte fue publicada por Francisco Igartua en su revista *Oiga* y otra circuló en los medios políticos. Un Plan Político fue terminado en octubre de 1989 diseñando cómo funcionaría el nuevo gobierno. Actualizado después de la derrota de Mario Vargas Llosa en la primera vuelta de abril de 1990, fue terminado poco antes del 28 de julio de ese año cuando Alberto Fujimori estaba asilado en el Círculo Militar.

El objetivo era “incorporarnos al modo de producción capitalista de la manera más rápida y armónica posible”. Sus autores sostenían que para lograrlo era necesario controlar el crecimiento demográfico que según ellos causa pobreza, apresar por tiempo indefinido a los políticos y exterminar a terroristas y delincuentes.

Pero el presidente electo fue dócil y el Plan Verde empezó a cumplirse con el *fujishock* de agosto. Entonces el golpe no se dio en 1989 ni en 1990 sino en 1992, desde Palacio.

Hubo modificaciones en el camino recorrido hasta el 2000. Para los redactores del Plan, el Estado equivalía a un vehículo cuyos dueños eran las Fuerzas Armadas. Ellas señalaban el rumbo y encargaban a choferes como Fujimori y otros la conducción para no desgastarse. Un gobierno secreto operaba en las sombras manteniendo la conducción estratégica.

Después del golpe, el Banco Mundial y el BID, es decir Washington, no sólo financiaron a Fujimori sino que gobernaron para y por él. En realidad el hombrecillo aquél nunca gobernó. Sólo se dedicó a robar todo lo que podía y, por supuesto, se lo permitieron. El FMI se hizo cargo de la economía, el Banco Mundial y el BID de la política social, las Fuerzas Armadas del orden, los servicios de inteligencia fueron autorizados a matar subversivos y todo lo que se les pareciera, y Vladimiro Montesinos conquistó el rol de un secretario-mayordomo mezcla de Rasputín y Beria.

El Plan Verde no se cumplió en todos sus puntos pero el espíritu [maligno] verde se mantuvo hasta hoy. Ahora sus financiadores y ejecutores quieren hacer el tercer período.

La CONFIEP se incorporó con entusiasmo, sus empresarios se asociaron al proyecto, los Colina hicieron de las suyas. Fujimori fue el muñequito viajero de un régimen complejo y siniestro que gobernaba en las sombras con el apoyo de Bush padre y sus sucesores hasta que se derrumbó.

En 1989 el equipo de trabajo previo a la elaboración del Plan, se formuló preguntas con sus respectivas respuestas. Transcribo algunas.

¿El sistema Nacional de Control, Seguridad y Propaganda que se plantea es el equivalente a una Gestapo?

Sí, definitivamente.

¿Se ha estimado la pérdida de vidas que la represión y la guerra contra-subversiva ocasionarán?

La solución Pinochet y el accionar de la DINA significaron cien mil muertos y un millón de exiliados, después de dieciséis años el retiro de las Fuerzas Armadas del gobierno se hizo con un cuarenta y cinco por ciento de votos a su favor. En el Plebiscito (aluden al plebiscito chileno) conserva al Comando en Jefe del Ejército.

Para ellos había demasiada gente en el Perú y demasiados pobres. Era necesario eliminarlos.

El problema más importante del Perú reside en que sus tendencias demográficas después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado proporciones de epidemia... Es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización en los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados.

Consideramos a los subversivos y sus familiares directos, a los agitadores profesionales, a los elementos delincuenciales y a los traficantes de pasta básica de cocaína como excedente poblacional nocivo. Para estos sectores, dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos para distraer en su atención, sólo queda su exterminio total.

El Plan Verde no se cumplió en todos sus puntos pero el espíritu [maligno] verde se mantuvo hasta hoy. Inquilinos transitorios habitaron Palacio. Ahora los financiadores y ejecutores del Plan Verde quieren hacer el tercer período. Creo que no podrán porque sus primeros enemigos son ellos mismos.

Deuda, crisis y calificadoras

A juicio las agencias de “rating”

Las agencias calificadoras de deuda –como Standard & Poors, Fitch y Moody’s, que copan el mercado– han dinamitado el Estado de bienestar a través de deuda privada hecha pública. Por eso hoy enfrentan querellas en su contra en varios países.

Vicent Canet

Movimientos sociales de diferentes países, entre ellos España, Portugal, Grecia, Alemania y Estados Unidos, han decidido presentar querellas contra las agencias de calificación de la deuda en sus respectivos países.

Estas agencias son empresas privadas cuyos nombres son repetidos hasta la saciedad en los medios [Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s], e influyen en las políticas económicas de países enteros. Sus informes determinan, en principio técnicamente, el riesgo de impago de la deuda pública de los Estados y de las empresas privadas, lo que les otorga un gran poder, ya que pueden provocar el desplome de una economía nacional sin asumir ninguna responsabilidad.

“Es necesario que aquellos que se amparan en el cuello blanco y la corbata entiendan que las ‘leyes del mercado’ tienen unos límites. No se puede permitir que toda la economía esté sometida a constantes ataques por parte de especuladores y, al final, que los responsables salgan impunes y, además, con los bolsillos repletos”, afirma Gonzalo Boye, uno de los abogados que lleva el caso en el Estado español.

La querrela, que ya ha sido admitida a trámite, fue presentada el 25 de febrero contra los responsables en España de las citadas agencias por el Observatorio per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals, y a ella se han adherido diversas entidades sociales y ciudadanas como ATAC y partidos políticos como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

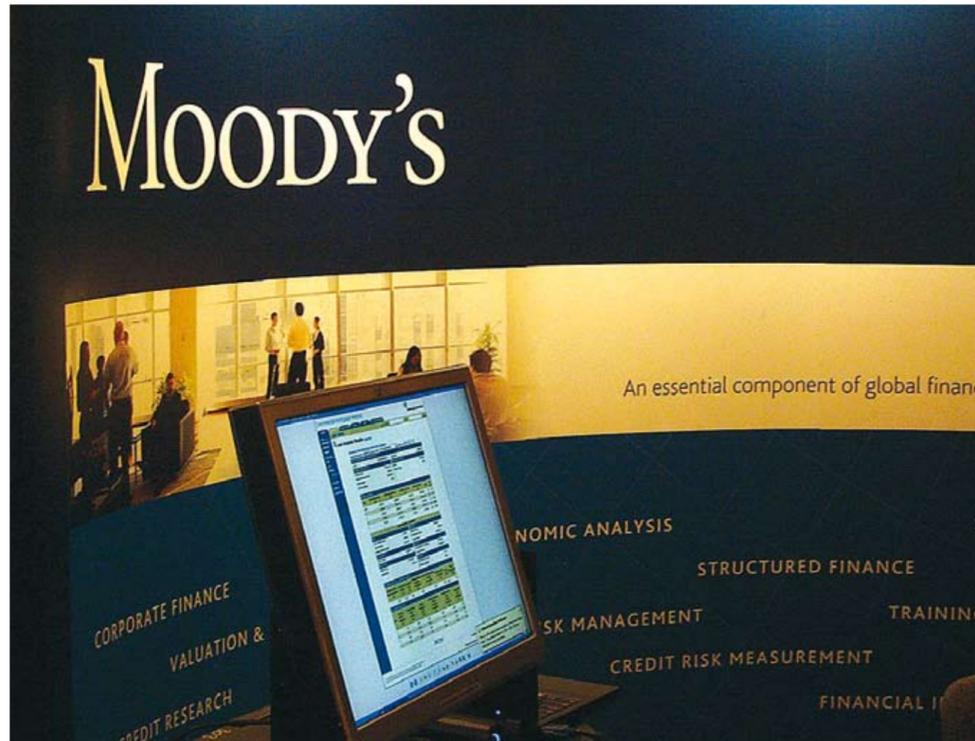
El “conflicto de intereses” y la manipulación de la información son las bases de la querrela presentada en relación a los artículos 284 y 285 del Código Penal español. Según los demandantes, los principales compradores de deuda pública de los Estados son clientes de las

agencias de calificación y sería por ello por lo que estas agencias han desvalorizado la deuda de algunos gobiernos, a partir de la difusión de información engañosa, con el objetivo de que los inversores obtuvieran mayores intereses con menor riesgo. Su posición oligopólica controla el noventa por ciento del mercado, facilita que “controlen” de hecho con sus informes de calificación los mercados financieros.

“Los criterios de elaboración de sus dictámenes son poco claros, poco explicables y, sobre todo, modulables en función de los intereses de estas empresas. No castigan de igual forma la penosa situación de Estados Unidos a como lo hacen con la española que, por cierto, no es tan mala como reflejan”, afirma Boye.

Y Juan Hernández, del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) de la Universidad del País Vasco, que también participa de la querrela, afirma: “Antes de la crisis ya actuaban así, por ejemplo cuando en 2001 el presidente de Brasil, Lula, subió el salario mínimo estas agencias calificaron la solvencia del país a la baja. Sus calificaciones están claramente politizadas. Se ha dado mucho poder a unas agencias que fueron, en parte, responsables de la crisis, ya que avalaron con supuestos criterios técnicos y valoraciones positivas productos tóxicos (como las hipotecas *subprime*) para la economía”.

Cabe recordar que, en el caso de la calificación de la deuda de empresas privadas, son éstas, las calificadas, las que pagan los honorarios a las agencias, con lo que reciben una enorme presión para valorar favorablemente sus productos, como en el caso de las *subprime*. De este modo, estas agencias asesoraron en la creación de productos financieros que ellas mismas calificaban posteriormente. De hecho, la Comisión Estatal de Bolsa y Valores del Senado de Estados Unidos también ha investigado estos hechos y su principal conclusión es que “esta crisis no habría sucedido sin las agencias de calificación”.(Diagonalweb)



La demanda en Portugal

El proceso abrupto de disminución de la calificación financiera de Portugal ha sido sostenido por una presión sin precedentes de las agencias de rating. Ésta es la presuposición que inaugura la acción judicial de académicos y economistas de izquierda contra Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s.

Tiago Avó

El proceso que llevó los intereses sobre la deuda pública portuguesa a un incremento histórico en el último año –de 6,2 por ciento en mayo del 2010 a más 8,4 por ciento en marzo del 2011 para las emisiones a diez años– ha sido presentado por José Reis, catedrático de Economía en la Universidad de Coimbra, José Manuel Pureza, líder parlamentario del Bloco de Esquerda e investigador de la Universidad de Coimbra, y dos profesores del Instituto Superior de Economía e Gestão. Además, también ha sido lanzada una petición pública que en menos de una semana ha logrado obtener más de cinco mil suscripciones.

El texto presenta los fundamentos críticos y judiciales para la queja. En la denuncia se afirma que “el desencadenante de la crisis



es el resultado de una responsabilidad imputable a personas e instituciones concretas, especialmente aquellas que han contribuido y se han beneficiado con los excesos del mercado financiero”.

Los fundamentos jurídicos de la denuncia se basan en la presunta práctica de un delito de manipulación del mercado.

Este tipo de delito es punible por ley y los signatarios de la denuncia lo definen del siguiente modo: “La manipulación del mercado tiene como presuposiciones la divulgación de informaciones falsas o inexactas que conduzcan al logro y tengan como objetivo alterar artificialmente el regular funcionamiento de los mercados.

Se trata de un delito material, ejecutado con el fin de obtener un beneficio o que resulta doloso para un tercero. En las actividades de las agencias encontramos indicios de todos esos requisitos”.

Aunque sean iniciativas elaboradas por gente reconocida y muy cualificada, todas las propuestas que rompan el discurso monocrorde de la “austeridad” están condenadas al olvido mediático. No obstante, esta iniciativa, poco divulgada, ha logrado abrir el cerco que han creado los medios de comunicación portugueses.

¿Quién califica a los calificadores?

Jesús Rodríguez Barrio*

En setiembre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers marcó el comienzo de la crisis financiera global. Dias antes, las principales agencias de calificación de riesgos financieros otorgaban la máxima calificación (AAA) a los activos financieros emitidos por esta compañía. La pregunta inmediata surgió de forma natural entre el público no “iniciado”: ¿cómo había podido suceder esto?

El papel que estas agencias juegan en la economía financiera tiene su origen en la financiarización de la economía. A partir de los años ochenta el centro de gravedad de la actividad económica se desplazó de forma radical hacia la especulación financiera. En este terreno, lo importante, como ya hizo notar el mismo Keynes, no es el valor real de los activos, sino la opinión dominante acerca de su valor entre los agentes que participan en los mercados financieros. La complejidad y la opacidad de las operaciones creadas por las infinitas cadenas de la especulación había algún valor real, de forma que lo importante pasó a ser “lo que la gente creía que valían”. Es decir: la opinión dominante acerca de su valor.

Esto nos conduce a lo que se suele llamar el momento 1 dentro de la historia de las agencias de rating: puesto que la opinión es decisiva para determinar el precio de los activos financieros, nada más fácil que manipular la opinión de los agentes para que los vendedores-especuladores “iniciados” pudieran obtener grandes beneficios con la venta de unos activos cuyo precio, a falta de mejor información, se determinaba fundamentalmente por la calificación que les otorgaban las agencias. Ello desplazó el papel de las agencias de calificación de ser simples evaluadores técnicos –si es que alguna vez lo fueron– al de creadores de opinión.

Este momento 1 comienza en 2001, cuando el crecimiento de la burbuja inmobiliaria adquirió un carácter explosivo en los países más afectados. La connivencia entre los vendedores de activos basura, basados en la especulación inmobiliaria, y los evaluadores-creadores de opinión se produjo de forma espontánea, reportando enormes beneficios a ambas partes. Todos los activos tóxicos, “empaquetados” para disimular su contenido, recibían la máxima calificación independientemente de su verdadero valor [próximo a cero en la mayoría de los casos].

El estallido de la burbuja condujo a la intervención primaria de los grandes bancos centrales que compraron masivamente los activos tóxicos con dinero público de nueva emisión [ese mismo dinero que, según la ortodoxia monetarista, nunca se puede usar para pagar las inversiones públicas o los gastos sociales].

Al mismo tiempo, las economías de la zona euro con estructura fiscal más débil [Portugal, Irlanda, Grecia y España] empezaron a pagar los efectos de la crisis con un enorme crecimiento de su endeudamiento público y privado, debido a la drástica disminución de sus ingresos y al aumento de los gastos relacionados con la crisis.

Además, una vez parado el primer golpe por el Banco Central Europeo, los gobiernos de la zona euro más afectados por la burbuja tuvieron que utilizar su presupuesto para tatar los agujeros “secundarios” de su propio sistema financiero. Este agujero ha resultado ser de un tamaño mucho mayor de lo esperado –y además creciente– en Irlanda. Y en el caso del Estado español también aparece, cada vez como más evidente, la necesidad de recapitalizar con dinero público las entidades financieras más afectadas por la burbuja inmobiliaria.

De esta manera llegamos al momento 2, en el cual las agencias de calificación vuelven a jugar un papel crucial. Quienes se enriquecieron de forma fraudulenta en la fase expansiva de la burbuja, con la sobrevaloración de los activos tóxicos que vendían, son ahora los compradores de la deuda emitida por los países en dificultades.

Ahora el negocio no consiste en vender caro –sobrecalificando los activos basura– sino en comprar barato, para lo cual vuelve a ser de gran utilidad el papel de unas agencias de calificación cuyos anuncios de recalificación a la baja de la deuda pública que venden los países en dificultades coinciden casi siempre, de forma altamente sospechosa, con los momentos en los que estos gobiernos buscan su financiación a través de ese mecanismo, aparentemente impersonal y situado por encima del bien y del mal, que recibe el nombre de “mercados financieros” y que tiene una entidad real concreta y perfectamente definida desde el punto de vista socioeconómico: los propietarios del capital financiero, los principales causantes y, al mismo tiempo, los únicos beneficiados por la actual crisis. (Diagonalweb)

*Profesor del departamento de Análisis Económico II de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.



South-North Development Monitor

● **Conferencia de los PMA: aspectos destacados del Plan de Acción.** La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA), celebrada en Estambul del 9 al 13 de mayo, concluyó con la aprobación de dos documentos: un Plan de Acción para el decenio 2011-2020 y la Declaración Política.

El Plan de Acción identifica las siguientes áreas prioritarias: la capacidad productiva [infraestructuras, energía, ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo del sector privado], la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, el comercio para productos básicos, el desarrollo humano y social [educación y formación, la población y la salud primaria, desarrollo de la juventud, vivienda, agua y saneamiento, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la protección social], las múltiples crisis y otros desafíos emergentes [crisis económicas, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y la reducción del riesgo de desastres], la movilización de recursos financieros para el desarrollo y la creación de capacidad [movilización de recursos nacionales, la asistencia oficial para el desarrollo, la deuda externa, la inversión extranjera directa y las remesas], y la buena gobernanza en todos los niveles. [16/5/2011]

● **Asamblea Mundial de la Salud: sociedad civil reclama destruir virus de viruela.** Más de treinta años después de la erradicación de la enfermedad, la destrucción de las reservas de virus de viruela vuelve a convertirse en la cuestión central de la 64ª Asamblea Mundial de la Salud, que comenzó el lunes 16 de mayo.

El virus vivo aún se mantiene en dos depósitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Estados Unidos y Rusia.

Organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta abierta pidiendo a los delegados a la Asamblea Mundial de la Salud que se termine la investigación con el virus de la viruela y se fije una fecha pronta e irrevocable para la destrucción de las reservas del virus. [16/5/2011]

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>



Martin Khor*

La ayuda a los países más pobres

el año pasado, pero esta tendencia podría revertirse una vez más si la economía mundial se desacelera, lo que parece probable. De hecho, los PMA son aún más vulnerables que antes a las fluctuaciones de la economía mundial y las perspectivas distan de ser brillantes.

La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA fue una buena oportunidad para revisar lo sucedido a los países pobres desde la anterior hace una década, y que los países desarrollados renovaran su apoyo.

Pero lamentablemente estos países no estuvieron dispuestos a renovar sus compromisos. Varias economías europeas están sumidas en una crisis de endeudamiento, los dirigentes políticos estadounidenses están obsesionados con la reducción del gasto público y Japón se encuentra en una situación de emergencia tras el terremoto y el tsunami. Por lo tanto, no quieren o no pueden —o ambas cosas— hacer promesas significativas en materia de ayuda.

El Plan de Acción de Estambul, adoptado el 13 de mayo, se limitó a establecer que los países que ya destinan más del 0,2 por ciento de su PIB como ayuda a los PMA continúen haciéndolo, los que han cumplido con el objetivo del 0,15 por ciento se comprometan a alcanzar el 0,2 por ciento y otros que se han comprometido al objetivo de 0,15 por ciento lo alcancen el año 2015.

Esta declaración débil y con lagunas fue criticada por las organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la Conferencia de Estambul.

“El plan de acción no tiene asimiento y parece haber dejado a las personas que viven en los PMA en peor posición que antes”, declaró Arjun Karki, portavoz del foro de la sociedad civil realizado durante la conferencia.

Thida Khus, directora de la ONG camboyana Silaka, dijo que “el fracaso de la Conferencia debe atribuirse en mayor medida a los países desarrollados por no comprometer recursos financieros adicionales para los PMA”.

De hecho, el Plan de Acción parece contener más compromisos de los PMA que de los países ricos para ayudarlos, lo cual constituye un retroceso respecto de las tres conferencias previas.

Por ejemplo, el cambio climático es un problema importante para los PMA que se enfrentan a un aumen-

to de las inundaciones y a una menor productividad agrícola. Pero en el Plan de Acción no hay ningún nuevo compromiso para ayudar a los PMA, ya sea con fondos o tecnología, más allá de los principios generales ya enunciados en otras instancias, mientras que estos países se han comprometido a integrar medidas nacionales de adaptación y mitigación en sus planes de desarrollo nacional.

Este compromiso va más allá de lo que los PMA están obligados a hacer en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En cuanto al comercio, la cuestión más controvertida fue la disposición de acceso libre de impuestos y cuotas para los productos de los PMA.

Los países en desarrollo hicieron el esfuerzo de avanzar con respecto a la decisión de 2005 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong, según la cual los países ricos otorgan el estatus de libre de impuestos al menos a un noventa y siete por ciento de los productos de los PMA, y extender este compromiso a la totalidad. Lamentablemente, en Estambul sólo se estableció “lograr la aplicación oportuna” de la decisión de Hong Kong.

Su adopción en la Conferencia, sin embargo, podría allanar el camino para un “resultado inicial” de las estancadas negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, que permita aplicarlo incluso antes de que concluyan las mismas, lo que constituye un avance.

Pero toda pequeña ganancia obtenida por los PMA en Estambul podría quedar en nada cuando firmen los acuerdos de asociación económica que están negociando con la Unión Europea.

En estos acuerdos se les pide a los países de África y el Pacífico —muchos de los cuales son PMA— que reduzcan sus aranceles a cero en el ochenta por ciento de sus importaciones y también que abran sus mercados de servicios, inversiones y contratación pública.

El éxito final de la Conferencia de Estambul depende ahora de que se cree un eficiente mecanismo de seguimiento para supervisar y poner en práctica las promesas contenidas en el Plan de Acción.

* Director ejecutivo de South Centre.



Ties Boerma.

Desigualdades merman ante enfermedades

Gustavo Capdevila

El mundo asiste a un cambio en la distribución geográfica de las enfermedades.

Tradicionalmente, los males infecciosos, causantes de la gran mortalidad de madres, niños y niñas, afectaban a los países pobres, y las no transmisibles, como la diabetes, dolencias cardíacas y el cáncer, a los países ricos.

Las últimas estadísticas distribuidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que ahora ya no importa tanto el nivel de ingresos de las naciones sino que todas deben afrontar el peso de las dos variedades de dolencias.

“Con frecuencia tendíamos a identificar a las enfermedades no transmisibles como los males de la opulencia, limitadas por tanto a los países de altos ingresos”, señaló a IPS Ties Boerma, director de Estadísticas de la Salud y de Sistemas de Información de la OMS. Pero los cambios ocurridos con el envejecimiento de la población, las mejoras aportadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las variantes en la fertilidad y otros factores determinan que corresponda a los países en desarrollo combatir a las enfermedades no transmisibles.

Boerma advirtió que el fenómeno comenzó en las áreas urbanas de las naciones en desarrollo, entre sus poblaciones más educadas, pero ya se expande con rapidez. Esa es la conclusión fundamental que los expertos de la OMS extraen del análisis de las estadísticas mundiales de salud publicadas en 2011.

Los PMA

En 1971, la comunidad internacional reconoció la existencia de una categoría de países caracterizados no sólo por la extrema pobreza de su población sino también por la debilidad de sus recursos económicos, institucionales y humanos, a menudo complicados por dificultades geográficas: los “países menos adelantados” (PMA).

Estos países están particularmente mal dotados para desarrollar sus economías domésticas y para garantizar un nivel de vida adecuado a su población. Además, son altamente vulnerables a las crisis externas o a los desastres naturales.



Por lo tanto, el grupo de los PMA constituye el segmento más débil de la comunidad internacional y su desarrollo económico y social supone un

enorme desafío, no sólo para ellos mismos sino también para los países y organizaciones que colaboran en su desarrollo. (CEPAL)